

LAS MUJERES Y SU ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA POLÍTICO

Lylian Mires

SUR Profesionales Consultores

Hoy en día, en Chile, el tema de la mujer ha empezado a perder su "invisibilidad", para ser considerado en ámbitos que hasta hace algunos años habían ignorado la especificidad de la condición femenina. Algunos problemas específicos de las mujeres son tratados en las propuestas legislativas, en los medios de comunicación, e incluso los partidos políticos han incorporado a sus programas la problemática femenina, con diversos enfoques e intensidades. La creación del Servicio Nacional de la Mujer, organismo desde el cual se delinean e implementan políticas específicas hacia las mujeres, es una señal de que la mujer ha sido de alguna manera incorporada a la agenda política del país.

Ninguna de estas iniciativas es casual: son el producto de la activa participación de un sector de mujeres chilenas en la gestación del nuevo horizonte político que se ha abierto en el país y del reconocimiento social de esa participación.

Sin embargo, aun cuando han tenido lugar algunos cambios importantes, éstos no se han consolidado. La demanda femenina no ha logrado los niveles de legitimidad alcanzados por otros actores sociales. Tampoco es posible hoy definir hacia dónde va esa mayor presencia femenina que se manifiesta en las diversas esferas de la sociedad, así como el papel que asuma en un proceso de democratización.

La búsqueda de una respuesta a tales interrogantes se relaciona estrechamente con la forma en que las mujeres logren establecer una articulación con el resto de la sociedad. Ante ello se han perfilado diferentes estrategias: por una parte, se busca la constitución de un movimiento de mujeres fuerte cualitativa y cuantitativamente, que les permita incidir en el carácter que asuman los procesos nacionales; por otra, se busca la ocupación de espacios institucionales desde donde se definan políticas específicas hacia las mujeres, que incorporen una dimensión de género. Tales posibilidades no son necesariamente excluyentes; por el contrario, pueden formar parte de un mismo proceso, aunque no indispensablemente paralelo y sincrónico.

Especialmente durante la década del ochenta, el creciente protagonismo de las mujeres en Chile hizo parecer cercana la posibilidad de constituir un movimiento. Desde entonces, se han planteado diversas interrogantes acerca de su futuro: ¿se trataba de un fenómeno transitorio, producto de la crisis económica, social y política por la que atravesaba el país?, ¿o había comenzado un proceso irreversible por el cual las mujeres --aunque no mayoritariamente, pero sí en un número y presencia significativos-- estaban logrando perfilar una identidad femenina, a partir de la cual serían capaces de formular propuestas de cambio democrático no sólo para ellas, sino para toda la sociedad?

Las respuestas que se aventuraban eran, por cierto, encontradas. Las predicciones acerca del movimiento de mujeres iban desde la duda acerca de su existencia misma, hasta los análisis más optimistas que conferían al proceso vivido por las mujeres el carácter de un movimiento que había logrado altos niveles de continuidad, lo que permitía afirmar su perdurabilidad e irreversibilidad.

La primera proposición se basaba en las experiencias pasadas de lucha femenina en el país. Muchas de ellas mostraban un carácter meramente de reacción ante determinados estímulos: éstos impulsaban a las mujeres a emprender iniciativas organizativas, que --aunque combativas-- cesaban una vez que desaparecían las causas que les habían dado origen. De acuerdo a este patrón, la organización y participación demostrada por las mujeres en los últimos tiempos también podría ser un fenómeno transitorio, que se diluiría una vez que desaparecieran las condiciones que le habían dado origen. Por tanto, una vez satisfechas las demandas de carácter general o inmediato, las mujeres volverían a sus espacios privados.

El segundo análisis se afirmaba en la gran fuerza que había adquirido la presencia femenina, con una organización dotada de altos niveles de autonomía y el fortalecimiento de una identidad femenina

surgida del reconocimiento de sus condiciones de subordinación y discriminación. En estas circunstancias, ni el restablecimiento del sistema partidario (eterna sombra que se cernía sobre el movimiento) podría despojar a las mujeres del espacio que se habían ganado y legitimado en la sociedad, ni el advenimiento de la democracia podría significar el regreso de las mujeres a sus roles tradicionales. Por el contrario, las propuestas de democratización y cambio generadas les permitirían asumir un papel destacado en el nuevo proceso.

Hoy, cuando ya ha transcurrido un lapso considerable desde el restablecimiento del régimen democrático en Chile, ni lo uno ni lo otro parece haber sucedido tan nítidamente. Las organizaciones de mujeres parecen haber decaído, pero no han desaparecido. El lugar que se asignaba a la mujer como fuerza democratizadora no ha sido plenamente asumido, pero tampoco las mujeres han renunciado a él.

Difícil es afirmar cuánta razón podría haber tenido cada uno de estos enfoques, y, por lo demás, conclusiones de esta naturaleza trascienden los objetivos de este trabajo. Simplemente señalo que los distintos pronósticos que se hacían sobre el devenir de la acción organizada de las mujeres podrían haber estado dotados de relativa validez, en tanto eran producto de la observación de una práctica sujeta a múltiples avances y retrocesos.

Hoy, la dirección que pueda asumir el proceso emprendido por las mujeres puede depender tanto de hechos externos a ellas, como de las múltiples relaciones que se estructuraron en el período anterior, y también en otros pasados, con el sistema político y la sociedad.

En el presente trabajo me he referido a las formas más relevantes que ha adquirido la organización y participación femenina en los distintos momentos, los ejes en torno a los cuales ha girado la acción de las mujeres, las lógicas derivadas de ellos, sus articulaciones, desencuentros y confluencias.

En este sentido, me ha parecido adecuado intentar determinar la extensión y profundidad en que están presentes las prácticas sociales recientes o remotas entre las mujeres; el grado de irreversibilidad de las transformaciones que parecieran mostrar los partidos políticos y el Estado, en su concepción actual del rol de la mujer; y, naturalmente, la fuerza con que dichas transformaciones logren redefinir una relación entre política y mujer.

LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES: ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Desde hace ya casi un siglo, las mujeres chilenas han mostrado una trayectoria organizativa relativamente importante. Se han movilizadas tras diversos objetivos en distintos períodos. En todos ellos es posible reconocer con cierta dosis de nitidez, al menos tres rasgos característicos en la participación femenina: la organización impulsada por mujeres, las promovidas y articuladas por y con el Estado, y las que tienen lugar a través de los partidos políticos.

Con el objeto de encontrar un hilo conductor entre las diferentes lógicas de acción resultantes de las diversas formas de organización, analizaremos sus formas más relevantes.

La organización desde las mujeres

La aparición de las primeras organizaciones impulsadas por las propias mujeres coincide con la irrupción de los sectores medios en el escenario nacional. Ya en 1915, organizaciones tales como el Círculo de Lectura de Señoras, agrupaban a mujeres de las emergentes clases medias que abogaban por el desarrollo cultural y acceso a niveles más altos de educación. Esta demanda inicial fue desplazada por la reivindicación del derecho a sufragio femenino, la que logró movilizar a un amplio sector de mujeres.¹

La demanda por la extensión del derecho a sufragio a la mujer contaba con el apoyo del entonces candidato a la presidencia, Arturo Alessandri Palma. No obstante, bajo su período presidencial no se otorgó el derecho a voto a la mujer.²

Pese a los reiterados rechazos a la demanda femenina, se creaban nuevas organizaciones, tales como la Acción Nacional de Mujeres de Chile, la Sociedad Protectora de la Mujer, la Asociación de Mujeres Universitarias, el Primer Comité Pro-Derechos Civiles de la Mujer, el Movimiento por la Emancipación de la Mujer (MEMCH). Estas organizaciones, a diferencia de las precedentes, se mantuvieron activas y fueron logrando éxitos parciales, como la obtención del derecho a voto en las elecciones municipales, que se hizo efectivo en 1941.

En 1944 se realizó el Primer Congreso Nacional de Mujeres, en que se reunieron más de doscientas organizaciones femeninas. A raíz de este encuentro surgió la Federación Chilena de Instituciones Femeninas, que cobijaba a mujeres de distintas orientaciones políticas, ideológicas o religiosas. Adhirieron a esta Federación las nuevas organizaciones que se crearon posteriormente, tales como el Partido Femenino Chileno (1946) y la Asociación de Dueñas de Casa (1947).

La estrategia asumida por la Federación se centró en una campaña de creación de una opinión pública favorable y de sensibilización de los parlamentarios en el tema de la obtención del derecho a voto de la mujer. Presentó al Senado, en 1945, el proyecto de ley para conceder el derecho a voto a la mujer, que fue patrocinado por parlamentarios de todos los partidos. En 1946 el proyecto fue aprobado por el Senado; sólo en 1948 fue discutido en la Cámara, y en 1949 la mujer obtuvo el derecho a voto.

En esta primera experiencia de relación con la política formal, las mujeres se organizaron y dieron una efectiva lucha en torno a la obtención del derecho a sufragio. Se vincularon con el Estado y con los partidos políticos para obtener reformas legislativas en su beneficio. Es interesante señalar el apoyo significativo que recibieron de parte de éstos últimos, incluso de los de tendencia más conservadora. Todos reconocían el valioso aporte que significaba la inclusión de la mujer en la vida política del país, aporte que en ningún caso parecía amenazar la posición de los varones en el quehacer político. Por el contrario, la posibilidad de la incursión femenina en la esfera pública era vista como una actuación secundaria, de apoyo a la gestión de los hombres en política. El rol de la mujer en política quedaba circunscrito también a su rol prevaleciente en el ámbito privado, que se proyectaba a la vida pública. **¡Error! Marcador no definido.** Este aporte femenino a la política y al quehacer social, que reforzaba el papel asignado a la mujer, era más bien alentado por dirigentes políticos, como lo demuestran las intervenciones de los parlamentarios de las más distintas tendencias en las diferentes discusiones a que fue sometido el proyecto de ley de obtención del voto femenino.³

La lucha sufragista aglutinó a sectores de mujeres hasta entonces ausentes de la vida política del país; sin embargo, ello no significó su reconocimiento como sujetos políticos ni una real inclusión de la mujer. Su participación electoral no implicaba su acceso a la esfera pública ni a la política formal. Como señala Molina, "si alguna vez existió en esas luchas una potencialidad colectiva de acción en el mundo político formalmente constituido, la solidez del dominio masculino terminó por disolverla y con ello crecieron las distancias entre espacios y voluntades de participación de hombres y mujeres, en desmedro de estas últimas".⁴

Luego de la obtención del derecho a sufragio, algunas mujeres, las que habían luchado más activamente, se integraron a los partidos políticos existentes, con lo cual sus reivindicaciones propias se diluirían en las de carácter más general establecidas por los lineamientos políticos de cada uno de ellos. La gran mayoría abandonó toda actividad pública, limitándose a ejercer periódicamente, en cada acto electoral, el derecho que tanto costó conquistar y que logró movilizar a un sector de las mujeres chilenas.

Salvo contados casos, este tipo de organización impulsada por mujeres ha tenido como común denominador el estar mayoritariamente constituida por mujeres provenientes de sectores medios o altos. En ello posiblemente ha influido la imagen proyectada por las luchas feministas que tenían lugar en los países desarrollados, a cuya información tenían mayores posibilidades de acceso. No obstante, ello no significaba necesariamente que este pensamiento hubiese permeado profundamente a un sector importante de mujeres chilenas, cuyas reivindicaciones --aunque se proclamaban feministas-- apuntaban sólo a la consecución de los derechos ciudadanos y a algunas mejoras en la situación de las mujeres trabajadoras. La importancia de la organización en torno al derecho a sufragio radica en su surgimiento como fuerza autónoma de mujeres que, aunque inserta en el rápido proceso de cambios que se vivía en el país, no obedeció a factores ajenos a las propias mujeres. A diferencia de ella, posteriormente, las organizaciones de mujeres aparecerán como parte integrante de los diferentes procesos que se den en el país, en algunos casos promovidas por el propio Estado, con el cual desde su origen establecerán una relación de dependencia; o bien, insertas en las diferentes concepciones políticas de su rol según lo definan los partidos políticos, en ocasiones acentuado su rol tradicional, y otras su pertenencia de clase.

La interacción de las mujeres con los procesos políticos ha sido así diferenciada con respecto a los partidos y al Estado, de acuerdo a su pertenencia de clase. Dentro de su secundariedad, las mujeres de

clase media han tenido un rol más activo, en la ayuda a la implementación de programas sociales; las mujeres de los sectores populares, en tanto, han sido confinadas a su papel de clientes.⁵

Luego del llamado "silencio feminista" que siguió a la lucha sufragista, las organizaciones impulsadas por las propias mujeres desaparecen de escena y sólo resurgen en el período del gobierno de Salvador Allende.

La organización femenina que tuvo lugar durante el gobierno de la Unidad Popular es un fenómeno que se inscribe en las características del alto grado de polarización del período, en el cual las mujeres constituyeron uno de los instrumentos más importantes.

Mujeres partidarias del gobierno socialista se organizaron en las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), para colaborar con las autoridades en el control de la distribución de alimentos. En estas organizaciones de carácter vecinal estaban representadas las distintas organizaciones sociales, así como comerciantes del sector. En ellas participaban mayoritariamente mujeres, que asumieron un trabajo organizativo que excedía los límites de la familia.

Los partidos de derecha, por su parte, lograron lo que la izquierda no pudo o no quiso lograr: organizar políticamente a las mujeres, cuya participación probó ser una de las armas políticas más eficaces. En 1971 se formó el Frente Democrático de Mujeres, que reunía a mujeres del Partido Nacional y Demócratacristiano, al que se unió el Poder Femenino, organización del movimiento de ultraderecha Patria y Libertad. A la organización se plegaron también esposas de oficiales de las Fuerzas Armadas y de trabajadores pertenecientes a los gremios que entraron en conflicto más abierto con el gobierno, tales como los transportistas y mineros del cobre. La "marcha de las ollas vacías", en que reclamaban ante las autoridades y la opinión pública por el desabastecimiento producido en el país, fue sin lugar a dudas uno de los hitos importantes de desestabilización del gobierno, con objetivos que iban más allá de la simple protesta del entorno cotidiano. De hecho, las campañas puerta a puerta para organizar comités de oposición a las medidas gubernamentales, la petición de renuncia al Comandante en Jefe del Ejército --general Carlos Prats-- y posteriormente del propio Presidente de la República, así como la presión que ejercieron en la Democracia Cristiana para unirse con el Partido Nacional en la Confederación por la Democracia (CODE),⁶ fueron todas acciones que transcendían los límites de lo considerado tradicionalmente del mundo privado.

La organización desde el Estado

El voluntariado y las Secretarías de la Mujer

Desde los años cuarenta, el trabajo dirigido a la mujer desde el Estado se ha canalizado a través de entidades con un claro contenido asistencial de ayuda a la mujer y al niño de los sectores más necesitados. Este trabajo generalmente ha sido realizado por voluntarias, mujeres de sectores acomodados, organizadas bajo la dirección de la esposa del Presidente de la República de turno, como una labor de apoyo a la gestión gubernamental. De allí que las voluntarias hayan privilegiado en este trabajo el proselitismo político entre las mujeres a las cuales se dirigían.

Los organismos a través de los que se ha desarrollado esta labor han sido las Oficinas o Secretarías de la Mujer, entidades estatales que, al menos hasta los años sesenta, no presentaban ningún tipo de estructura institucional definida ni continua. En 1949 se creó la Oficina Jurídica de la Mujer; en 1951, la Oficina de la Mujer, encargada de estudiar la situación social de la mujer y propiciar modificaciones a su discriminación en el Código Civil y del Trabajo; en 1969 se creó la Oficina Nacional de la Mujer, que en su año de vida llevó a cabo proyectos de coordinación con otras instituciones estatales, programas de salud, recreación, trabajo, organización y capacitación. En 1972 apareció la Secretaría Nacional de la Mujer, que privilegió los problemas de abastecimiento y control de precios, salud y educación femeninos.

Una interesante iniciativa destinada a institucionalizar la participación femenina desde el Estado fue el proyecto de creación del Ministerio de la Familia, contenido tanto en el programa del candidato demócratacristiano Radomiro Tomic, como en el del candidato socialista Salvador Allende, ambos postulantes a la Presidencia de la República en las elecciones de 1970. En el proyecto, presentado al Congreso durante el gobierno de la Unidad Popular, se designaba a una mujer como futura ministra. Sus tareas se centraban en un intento de incorporación y desarrollo de la mujer a la sociedad, que le

permitieran asumir sus derechos y responsabilidades como ciudadana. Dicho proyecto no alcanzó a ser aprobado en el Congreso.

Esta forma de articulación de las mujeres con el Estado, creada y promovida por él, encontró su legitimación con la creación y extensión de los Centros de Madres.

Los Centros de Madres

Desde la mitad de la década de los sesenta, en conformidad con el proyecto demócratacristiano de incorporación de los sectores tradicionalmente marginados a la vida social económica y política del país -**¡Error! Marcador no definido.**-entre ellos, las mujeres-**¡Error! Marcador no definido.**-, se estimuló la proliferación de organizaciones vecinales para la satisfacción de las necesidades específicas de las dueñas de casa pertenecientes a los sectores más pobres de la población.

En el marco del proyecto de organización comunitaria incentivada por la Promoción Popular,⁷ fueron creados los Centros de Madres. Estas organizaciones de mujeres se inspiraron en aquéllas creadas y patrocinadas por la Iglesia, que cobijaban a mujeres de sectores populares y donde se les impartía instrucción y capacitación en labores femeninas, tales como costura y tejidos destinados a la comercialización para la obtención de un ingreso suplementario.

La estructura de estos centros fue reproducida y ampliada por las activistas de gobierno, "cambiando sólo algunas palabras de connotaciones religiosas por otras con un tono más político".⁸

Los centros de madres se reprodujeron a una velocidad vertiginosa: en 1966, sólo en Santiago y Valparaíso existían más de 3 mil; en 1970, alrededor de 9 mil, con más de 450 mil afiliadas; y para 1973 se contaban con más de 20 mil, con una cifra cercana al millón de afiliadas.⁹

Si bien en la idea de la creación de los centros de madres (el pensamiento comunitarista cristiano) se privilegiaba la autonomía de su gestión, ellos han sido permanentemente dirigidos por las voluntarias, impregnados de un contenido clientelístico y asistencial, y han creado altos niveles de dependencia del Estado en la satisfacción de las necesidades de sus afiliadas. Sus funciones siguieron circunscritas, como en sus organizaciones antecesoras, a la capacitación femenina en tareas domésticas.

Durante el gobierno de la Unidad Popular, los centros de madres siguieron su curso acelerado de expansión, a pesar del reconocimiento de parte de un sector de mujeres de que estas organizaciones relegaban a las mujeres a la esfera de la familia. Se introdujeron innovaciones en la estructura y articulación de estas asociaciones con otras organizaciones sociales. En un intento de creación de instancias de discusión y solución a los problemas locales, se ligaron los centros de madres a los comités vecinales y a las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios y organizaciones de salud barriales. Los centros se agrupaban en uniones locales, éstas en uniones comunales, las que se articulaban en la Federación Provincial de Centros de Madres, conformando la Confederación Nacional de Centros de Madres, Cocema. Con esta organización pasaban a constituir un poder social creciente en la vida comunal, articulados en una organización de carácter nacional.

En este período, los cambios introducidos reclamaban un mayor desarrollo e incremento de las responsabilidades sociales de las mujeres. Por una parte, se estimulaba a la mujer a incorporarse a la producción y a una mayor participación social. En contraposición, el discurso oficial siguió dirigido a las mujeres en tanto madres, dueñas de casa y esposas. Esta ambigüedad, que atestiguaba la carencia de una clara política alternativa hacia la mujer de parte de los partidos integrantes de la coalición de izquierda, influyó en que no se lograra cambiar sustancialmente los contenidos de los centros.

A pesar de los evidentes avances al respecto, el proceso de integración de la mujer en los distintos ámbitos de la vida del país fue ocurriendo sin una ruptura de sus condiciones de subordinación; a lo más, propendió a mejorar parcialmente las condiciones en que dicha subordinación se producía. Por una parte, se estimulaba a las mujeres a jugar un papel político, social y económico más destacado, pero éste seguía siendo considerado de carácter secundario: el discurso de la femineidad fue reproducido por la Unidad Popular. Las mujeres, en estas circunstancias, no eran vistas como potenciales actores políticos merecedores de formación política.¹⁰ En las interpelaciones a las mujeres se seguía suponiendo que sus intereses en tanto mujeres eran inexistentes y que éstos se reducían a la articulación de los intereses del grupo familiar que representaba.

Las mujeres y los partidos

En general, la militancia femenina en los partidos ha sido escasa, aunque ya desde finales del siglo pasado existía filiación femenina en ellos.¹¹

En 1922 se fundó el primer partido femenino: el Partido Cívico Femenino, que perseguía la obtención de derechos cívicos y políticos para la mujer y el mejoramiento de las condiciones de vida de la madre y el niño.

El Partido Femenino de Chile, fundado en 1946, planteaba la reivindicación de los derechos femeninos y la dignificación de la mujer. En la campaña presidencial de 1952, este partido apoyaba al candidato independiente Carlos Ibáñez, aduciendo para ello el que no estuviera sometido a la arbitrariedad de ningún partido político, su honradez, su capacidad moral y su honorabilidad libre de apasionamientos partidistas.¹²

Después de la campaña, el Partido Femenino se dividió y dio origen al Partido Progresista Femenino, que se definía como una organización democrática de mujeres, "no para rivalizar con el hombre, ni para parecérselo ni usurpar sus cargos, sino para aportar su honradez, su espíritu y su fuerza".¹³ En el programa de este partido, junto con orientaciones hacia la defensa de la mujer y el niño, se encuentran proposiciones relacionadas con temas tales como la descentralización administrativa, lo económico, religioso e internacional, con propuestas de reformas, todo ello sin propender a una política feminista.

En 1952, María de la Cruz, Presidenta del Partido Progresista Femenino, fue elegida senadora, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en el país. Sin embargo, a poco tiempo de su elección fue solicitada su inhabilitación.¹⁴ Tras el escándalo que rodeó a este hecho y las divisiones internas inminentes dentro del Partido, éste se disolvió, marcando también el fin de los partidos femeninos y la representación de intereses de las mujeres a través de sus propias organizaciones. De allí en adelante, los intereses de las mujeres ante el sistema político han estado mediatizados por la interpretación que los partidos políticos puedan hacer de esos intereses; han quedado reducidos al interés de clase, en la lectura que de ellos hacen los partidos de izquierda, o al rol tradicional, de acuerdo a las tendencias de centro o de derecha.¹⁵

La incorporación de las mujeres a los partidos ha sido cualitativa y cuantitativamente poco relevante.¹⁶ Su presencia en ellos no ha logrado transformaciones serias en la forma de hacer política, como tampoco en el tratamiento de los problemas específicamente femeninos. Todo ello ha constituido la base para el surgimiento de un sentimiento de carencia de representatividad de las mujeres en los partidos políticos y, por tanto, una falta de interés de su parte por lograr algo a través de ellos.

La izquierda tradicional supeditaba la subordinación de la mujer a la subordinación de clase, de modo tal que en sus planteamientos aparece tratada dentro de la globalidad de su proyecto de liberación de la clase oprimida, de cuya emancipación dependería automáticamente la de la mujer. Consecuente con este proyecto, su discurso ha estado dirigido en forma general a los trabajadores y, a través de éstos, a sus esposas. Los llamados directos a las mujeres han ido a la mujer trabajadora, cuya proporción histórica dentro de la población femenina económicamente activa ha sobrepasado ligeramente el 20 por ciento (sólo en la actualidad este porcentaje ha superado el 30 por ciento). Por otra parte, el pensamiento feminista durante muchos años fue catalogado por la izquierda tradicional como una manifestación ideológica burguesa, por lo que difícilmente podría haber incorporado una dimensión de género a sus programas.

Entre los partidos de izquierda y las mujeres ha existido una desconfianza mutua. Los primeros se han mostrado temerosos del comportamiento electoral de las mujeres, que han tendido a apoyar las posiciones conservadoras o de centro.¹⁷ Partiendo de una definición de la mujer como conservadora *per se*, no han elaborado una política clara hacia ellas, incluyéndolas sólo en forma limitada o cuando su voto ha sido necesario. En 1973, las mujeres chilenas constituían entre 20 y 30 por ciento del total de miembros de los partidos Socialista y Comunista.¹⁸

A diferencia de la izquierda, los partidos de derecha han sabido utilizar un lenguaje político que ha llegado a las mujeres. Las han invocado en sus roles más tradicionales, resaltando los valores de abnegación y espíritu de sacrificio, en los cuales han sido largamente socializadas y, por consiguiente, con los que se sienten identificadas. Su éxito, que se traduce en un mayor poder de convocatoria y

adhesión electoral entre las mujeres, se debe a que ha tocado algunos de los intereses reales y concretos que mueven a las mujeres; por otra parte, al no pretender impulsar cambios importantes, no se presenta como una amenaza a la seguridad y estabilidad de sus familias.

La poca representación de las mujeres en los partidos y su integración subordinada a éstos ha incidido poderosamente en su exclusión de la elaboración de las políticas partidarias y en su escasa participación en los cargos públicos.

Si se examina la participación de las mujeres en los cargos públicos, encontramos que hasta 1960 hubo sólo dos mujeres ministros de Estado: Adriana Olgún de Baltra, abogado perteneciente al Partido Radical, en Justicia; y María Teresa del Canto, profesora y miembro del Partido Femenino, en Educación. Bajo los gobiernos de Alessandri y Frei no hubo ninguna ministra mujer. En el gobierno de Allende, Mireya Baltra, comunista, en Trabajo.

En los cargos comunales, en donde se ha hecho más manifiesta la participación femenina, ha habido sólo tres alcaldesas de Santiago por designación presidencial, en 1939, 1957 y 1975.

Tampoco en los municipios ha habido una participación femenina importante: en 1944 había 29 regidoras, en 1953 se contaban 106; en 1956, 68; en 1960, 83; en 1963, 95; en 1967, 127; y en 1971, 120 regidoras de un total de 1.653 cargos elegidos. En el poder legislativo hubo 30 parlamentarias entre 1952 y 1973.

La participación femenina en la política formal: las elecciones

La participación de las mujeres en la esfera de la toma de decisiones de la vida política nacional ha sido escasa. No obstante, desde que comenzaron a votar en las elecciones presidenciales (1952), su participación en la elección de sus representantes ha sido crecientemente significativa, lo que ha hecho que, gradualmente, su voto se convierta en un elemento decisivo para el éxito o fracaso de los candidatos.¹⁹ Prueba de ello es que a partir de 1964, desde cuando se registra una inscripción electoral femenina cercana a su proporción real en la población, comenzó a aparecer en los programas de las candidaturas al gobierno un esbozo de discurso específico dirigido a la mujer, aunque estas alternativas siguieran centradas en temas tales como la maternidad, la seguridad social y atención a la familia y los hijos.

En los análisis sobre el comportamiento electoral de las mujeres se ha afirmado reiteradamente que el voto femenino es *per se* conservador. No obstante, si se atiende a los resultados electorales, en el período comprendido entre 1952 y 1970 resalta una tendencia a un incremento global en las posiciones proclives al cambio expresadas en la votación, proceso que presenta diferentes ritmos entre hombres y mujeres. La votación de izquierda de las mujeres presenta un crecimiento sostenido, no así la votación de derecha y centro, que oscila en cada evento electoral. El apoyo inédito que recibió el candidato de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei, en las elecciones presidenciales de 1970 por parte de las mujeres (63 por ciento del voto femenino) absorbió en esta ocasión gran parte de las preferencias que en la elección anterior hicieran triunfar al candidato de derecha. Sin embargo, la votación de izquierda de las mujeres no se redujo, sino que aumentó en casi 10 por ciento con respecto a la elección anterior. Aun en la elección de 1970, en que se observa un descenso de la votación de izquierda nacional con respecto a la elección anterior de 1964, la votación femenina por esta tendencia descendió sólo en 1 punto, en tanto que la masculina experimentó un descenso de 3,3 con respecto a 1964. De la misma manera, en la elección parlamentaria de 1973 --que adquirió un carácter verdaderamente confrontacional al presentarse dos coaliciones, una de apoyo al gobierno (Unidad Popular) y otra de rechazo (Confederación por la Democracia, coalición de partidos de centro y derecha)-- las mujeres apoyaron en 38,8 por ciento a la lista de la Unidad Popular, lo que significó un incremento de 7,7 de la votación femenina por las posiciones de izquierda. Los varones incrementaron su votación en 6,2 con respecto a la elección de 1970.

Este ritmo más acelerado observado en la adhesión de las mujeres a los programas propiciadores de cambio, coincide a su vez con la mayor organización de las mujeres a través de los Centros de Madres y otras organizaciones comunitarias (aun cuando estas organizaciones no hayan jugado un papel visible en su desarrollo político, ni menos aún en develar sus intereses de género), así como con su acceso a niveles crecientes de escolaridad y con la mayor incorporación femenina al mercado de trabajo.

Resultados de diversas encuestas de opinión que apuntan en este sentido,²⁰ señalan que la diferencia de votación entre hombres y mujeres deriva fundamentalmente de la forma de inserción de la mujer en la sociedad. Prácticamente no se registran diferencias en las preferencias políticas entre hombres y mujeres que pertenecen a un mismo estrato socioeconómico y que trabajan fuera del hogar. Donde se observan las mayores diferencias, es entre las mujeres cuyo oficio es dueña de casa. De tal suerte, la ubicación de la mujer en la esfera de lo público o lo privado parece ser el camino necesario para comprender la relación que las mujeres establecen con la política y los factores que en esa relación inciden.

Que las mujeres en los sucesivos eventos electorales hayan apoyado con más fuerza a una u otra opción, no deriva de una condición intrínseca de las mujeres que puedan hacerla más o menos conservadora. Como señala Gallardo,²¹ lo interesante sería encontrar un elemento eficaz para medir el conservadurismo o el radicalismo femenino no en un evento electoral, sino en su práctica diaria, en su otra forma de aproximarse a la política. Ello ha quedado demostrado en las últimas décadas, en que las mujeres han desarrollado iniciativas que implican una alta dosis de combatividad, con un gran contenido político, pero con prácticas diferentes a las de los hombres; se trata de una práctica "no formal", sin que ello signifique un desconocimiento de las instancias formales, en las cuales, sin embargo, se sienten más ajenas y menos representadas.

En este sentido, las luchas por la conquista del derecho a voto, la participación en el interior de los partidos y en las organizaciones, les ofrecieron a las mujeres formas distintas de socialización política. Estas no quebraron ni develaron las condiciones subordinadas de integración, las que se reprodujeron bajo distintas formas, acordes a los sucesivos proyectos que se desarrollaban en el país y de acuerdo también a su grupo de pertenencia. Sin embargo, ello no significa que pueda considerárselas pasivas. Por el contrario, las mujeres de los sectores populares han jugado un papel importante en las luchas de los trabajadores. Su rol en las tomas de terreno o en el apoyo a las huelgas ha sido destacado, aunque no siempre reconocido. Pero esta actuación ha tenido un carácter auxiliar, subsidiario y temporal. Su activa participación en tales hechos no logró transformarse en protagónica, debido a las mismas limitaciones impuestas por la socialización femenina, que ha actuado en contra de su constitución como sujetos políticos. Su definición como madre, esposa o dueña de casa, ha sido más poderosa que el papel asumido en los hechos en los cuales ha tomado parte. De allí que una vez cesado el estímulo que dio origen a su participación, hayan vuelto a sus funciones tradicionales. Por su parte, las mujeres de los grupos medios se han movilizado por motivaciones personales, políticas, laborales o de reivindicación femenina. Sin embargo, para la participación genérica de las mujeres parece necesaria la intervención de valores culturales que definan su papel y su aprendizaje en la acción participativa.

Paradójicamente, es bajo el autoritarismo que surge la posibilidad del establecimiento de nuevos espacios y formas de aproximación de la mujer a la política.

LAS MUJERES BAJO EL GOBIERNO AUTORITARIO

La organización desde el Estado

El 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar contaba con un considerable apoyo femenino. Como mecanismo de capitalización y transformación de esa adhesión en apoyo político al régimen, en octubre de ese mismo año se fundó la Secretaría Nacional de la Mujer, dependiente de la Secretaría General de Gobierno a través de la Dirección de Organizaciones Civiles. El criterio inspirador de este organismo fue "dar un cauce amplio de acción a las mujeres que con tanta abnegación y responsabilidad participaron en la lucha por la libertad de Chile en la época marxista".²²

Lucía Hiriart de Pinochet, en su calidad de primera dama, presidía la Secretaría Nacional de la Mujer, la Fundación de Ayuda a la Comunidad y CEMA-Chile.

La Secretaría se orientó hacia los sectores más desposeídos, centrando sus tareas en la capacitación, como una forma de adaptación de las mujeres más pobres a las nuevas condiciones económicas, y contribuyendo de paso a la canalización de un potencial de conflicto social.

Cocema, creado en el gobierno de Allende como organismo coordinador de los centros de madres, pasó a llamarse CEMA-Chile, que se definía como "una corporación privada sin fines de lucro, completamente

ajena al proselitismo político o religioso, cuyo principal objetivo es lograr el desarrollo integral de las mujeres agrupadas en centros de madres a través del país y contribuir a través de estos centros al bienestar de los miembros de la familia".²³

La acción de CEMA-Chile se centró en la capacitación, en la creación de hogares y policlínicas; asistencia en salud, vivienda, educación y consejería jurídica. Se trataba de perfeccionar a las mujeres en el cumplimiento de sus roles de esposas y madres, y se les brindaba a la vez la posibilidad de obtener ingresos suplementarios derivados de la comercialización de los productos elaborados en las actividades de capacitación.

Para el cumplimiento de estas funciones, se creó un voluntariado constituido por esposas de miembros de las Fuerzas Armadas y de autoridades nacionales y regionales.²⁴ El trabajo se focalizó en la difusión de los valores familiares y en la orientación de las mujeres hacia las labores más tradicionales. Se estimuló fuertemente la organización femenina, asignando a la mujer el rol de educar hijos para la patria y asegurar de este modo la continuidad ideológica del régimen.²⁵

La función clientelista cumplida por el voluntariado a través de su trabajo en los centros de madres y otras organizaciones de carácter asistencial, se veía fortalecida en la medida en que las instituciones de voluntarias eran los únicos canales de comunicación entre mujeres y gobierno. En los sectores populares, muchas mujeres permanecieron en los centros de madres, y otras se incorporaron a ellos, por la posibilidad de obtener ingresos que paliaran sus deterioradas condiciones de vida, o por el acceso a beneficios sociales que de otra forma no podían obtener. Sin embargo, tanto las expectativas incumplidas como la estructura autoritaria imperante en los centros, influyó en que un número importante de mujeres se retirara de ellos o formara organizaciones paralelas. Es así como del millón de afiliadas que existía en 1973, en 1984 había descendido a 240 mil y en 1988 a 200 mil afiliadas.²⁶

La apelación desde las instancias del Estado a los roles más tradicionales de las mujeres se encontraba, sin embargo, obstruida por las condiciones de vida en creciente deterioro que empezaban a enfrentar, especialmente en los sectores populares. El discurso oficial estimulaba a las mujeres a permanecer en sus hogares, marginadas del mercado laboral; pero tanto la necesidad de encontrar los medios de subsistencia para sus familias, como los efectos que pudieran haber ejercido sobre ellas las crecientes tasas de participación femenina en el mercado de trabajo registradas en la década anterior, se erigieron como un obstáculo al cumplimiento del rol doméstico y al disciplinamiento esperado de parte de las mujeres. Muchas se incorporaron al mercado de trabajo como forma de paliar las consecuencias económicas de la prolongada cesantía del jefe de hogar.²⁷ Otras desarrollaron una vasta gama de estrategias colectivas de sobrevivencia.

La organización desde las mujeres

Desde los inicios de los años ochenta, empezó a tomar forma un proceso que había comenzado en los primeros años del régimen militar: el surgimiento y desarrollo de numerosas organizaciones, protagonistas de las más diversas prácticas participativas en torno al enfrentamiento de variados problemas.

El detonante de dicho proceso se ubica en un plano defensivo ante amenazas concretas a la vida y a la subsistencia, contra las cuales grupos constituidos fundamentalmente por mujeres se organizaron en torno a problemáticas que eran de su incumbencia tradicional: la reproducción física y material de la unidad familiar.

Despojados de los canales tradicionales de representación de la sociedad civil y frente a la agresión a la vida y a la seguridad de las personas, se organizaron grupos por la defensa de los derechos humanos, constituidos mayoritariamente por mujeres. Estas, en su calidad de madres, esposas e hijas llevaron su denuncia a las calles, ante la opinión pública y las autoridades, constituyendo las primeras protestas públicas organizadas contra el régimen.

La composición de estas organizaciones era pluriclasista, en tanto denunciaban de una represión que no reconocía fronteras de clase. Su lógica de acción se enmarcaba en la de la política tradicional, probablemente por la estrecha vinculación a los partidos políticos proscritos a los cuales pertenecía gran parte de las víctimas de la represión. Esta lógica partidaria permaneció a lo largo de toda su trayectoria, y tal vez ella explique tanto el bajo nivel de autonomía que desarrollaron estas organizaciones con

respecto a los partidos, como el hecho de que, a pesar de su constitución mayoritariamente femenina, no hayan incorporado una dimensión de género a su lucha por la defensa de los derechos humanos, reproduciendo la tradicional ausencia de esta dimensión en la izquierda.²⁸

Las movilizaciones de estas organizaciones se mantuvieron y acrecentaron durante todo el período de la dictadura, desempeñando un papel importantísimo en la denuncia de la violación de los derechos humanos; pasaron a constituir a la vez uno de los ejes centrales en torno al cual se organizó la acción de las mujeres.

Como un mecanismo reactivo ante las deterioradas condiciones de vida que amenazaban la sobrevivencia física, exacerbadas por los altos niveles de cesantía, comenzó a surgir una vasta gama de organizaciones populares, cuyo objetivo se centraba primordialmente en la búsqueda de soluciones colectivas al problema concreto de la sobrevivencia de los pobladores.

Estas iniciativas surgieron asentadas sobre una base territorial, enmarcada por el barrio, que pasó a constituirse en el lugar en donde se hacían públicos y se buscaba la solución a los problemas. Los objetivos revestían un carácter inmediato en torno a la satisfacción de las necesidades que iban presentándose.

En las primeras formas de organización surgidas intervino la Iglesia Católica; los grupos se nuclearon en torno a personas con una experiencia organizacional previa, derivada en muchos casos de sus militancias políticas o de su participación en organizaciones anteriores; sin embargo, aunque intervinieron en ellos militantes de partidos, primó el sentimiento de que la presencia abierta de éstos representaba un factor de división interna entre sus miembros.²⁹ En este rechazo a la presencia partidaria abierta intervino también, en una medida no despreciable, la necesidad de sobrevivencia de las emergentes organizaciones, que debían mostrar formas organizacionales diferentes a aquellas que eran objeto de la represión inmediata, como lo era la actividad partidaria. Por esta razón, en dichas organizaciones se intentó reiteradamente hacer aparecer como primario el interés inmediato de la subsistencia, privilegiando el surgimiento de valores de solidaridad y autoayuda.

Las organizaciones en referencia estaban compuestas por pobladores, es decir, un universo que representa un alto grado de heterogeneidad, unidos bajo el común denominador de la exclusión.

Al mismo tiempo, la desarticulación y proscripción de los partidos políticos llevó a militantes activas a volcar su práctica partidaria en los sectores populares urbanos; este escenario sustituía la práctica tradicional de los partidos de izquierda en torno a la clase, la que, a consecuencia de la desindustrialización, la cesantía y la prohibición de funcionamiento a las organizaciones gremiales o sindicales, se comenzaba a desdibujar cuantitativa y cualitativamente. Como consecuencia de ello, su radio de acción se extendió a las organizaciones surgidas en estos sectores y, en la medida en que éstas estaban compuestas mayoritariamente por mujeres, es en este ámbito en donde desarrollaron su actividad militante.

En este proceso intervinieron, junto a las propias protagonistas de las nuevas prácticas de acción y organizativas surgidas, algunos grupos de mujeres -**Error! Marcador no definido.**- gran parte de ellas profesionales-**Error! Marcador no definido.**- inspiradas en las corrientes feministas que venían cobrando fuerza creciente en el país, probablemente por el avance de esta corriente en los países desarrollados, con los cuales muchas de ellas entraron en contacto en el exilio. En otros casos, influyó en este proceso el reconocimiento -**Error! Marcador no definido.**- derivado de la ruptura de sus militancias pasadas en partidos políticos de izquierda-**Error! Marcador no definido.**- de que la liberación de la mujer no estaba necesariamente supeditada a la liberación de la clase; que en el paradigma de los países hasta entonces llamados socialistas, la incorporación plena de la mujer al trabajo remunerado no iba de la mano con el reconocimiento de su especificidad, sino que ésta se diluía bajo la categoría genérica de mujer trabajadora.³⁰

El proceso de integración paulatina vivido por las mujeres en este período encontró un importante refuerzo en los primeros programas desarrollados en el área de la mujer. Estos comenzaron en los años ochenta, como resultado de la reconstitución del mundo académico alternativo en torno a las organizaciones no gubernamentales (ONG). En la medida en que se ampliaba el universo de las ONG, se fueron abriendo nuevos espacios para la acción e investigación en torno a la mujer.

Los programas de acción en su mayoría estaban dirigidos a aspectos específicos de la realidad de la mujer popular urbana. En el hecho de que se haya privilegiado a las mujeres de los sectores populares influyó probablemente la opción ideológica de las investigadoras, y también las prioridades establecidas por las agencias de financiamiento de las ONG.³¹ Tales circunstancias incidieron en que se haya producido un vacío en el trabajo dirigido a otros sectores de mujeres, como las de clase media, que sin lugar a dudas podrían haber representado un potencial enriquecedor en la organización de mujeres.

A pesar de ello, y de la disparidad de intereses y orientaciones presentes en la investigación e implementación de programas de acción, las ONG constituidas por mujeres, así como los Programas o Unidades de la Mujer existentes en las diferentes instituciones, han jugado un insustituible papel en la consolidación, desarrollo y extensión del proceso organizativo de la mujer popular, constituyendo un trabajo de apoyo externo a las organizaciones femeninas.

Se advierte, por tanto, la afluencia de distintas vertientes de pensamiento, con historias y lógicas de acción propias: una vertiente social, una vertiente feminista y una vertiente política en torno a cuatro ejes principales en que giraba la práctica de las mujeres: la defensa de los derechos humanos, la sobrevivencia, la especificidad de género y la política.

Dada la diversidad de las prácticas que las mujeres desarrollaban en torno a estos cuatro ejes centrales, y en tanto obedecían a objetivos y lógicas de acción diferentes, la posibilidad de la conformación de un movimiento estaba sujeta a las articulaciones que pudieran producirse entre las diversas organizaciones de mujeres, fruto de la fusión y transformación recíproca de las distintas vertientes. En definitiva, de la posibilidad de que lograran un punto de encuentro entre objetivos y demandas también diversas. Este punto de fusión podría expresarse en la generación de una identidad de mujer que reconociera en su práctica inmediata el carácter de su subordinación; y que, con base en articulaciones más generales, diera lugar al surgimiento de una identidad compartida del movimiento de mujeres.

De allí que la consolidación de un movimiento de mujeres se presentara como una posibilidad entre otras en las que podría derivar el importante proceso de organización y participación que se había puesto en marcha.

Por qué las mujeres

Las organizaciones populares de sobrevivencia y de defensa de los derechos humanos estaban compuestas por una mayoría abrumadora de mujeres,³² lo que ha llevado a que se las considere como la vertiente social del movimiento. Este hecho nos conduce a preguntarnos por qué las mujeres, más allá de la situación de crisis, fueron capaces de organizarse y protagonizar procesos de trascendental significado para su propio desarrollo personal y para abrir un horizonte democrático para el país, en circunstancias de la secundariedad social, económica y política a la que han estado relegadas.

La explicación a este hecho habría que buscarla probablemente en los objetivos que persiguen estas organizaciones, los que calzan perfectamente en la diferenciación sexista de roles prevalecientes.

Cuando la mujer asume la defensa de los derechos humanos lo hace en su calidad de madre o esposa, ejerciendo su rol de veladora de la seguridad y la vida de los miembros de su familia. Cuando se incorpora a las organizaciones de sobrevivencia, también está desempeñando una función relacionada con su papel de mantenedora de las condiciones de reproducción material de la familia. Indudablemente que en esas condiciones esa forma de mantener la unidad, seguridad y vida familiar, significa un grado alto de sacrificio y de temeridad; sin embargo, éstas son cualidades femeninas que han sido estimuladas tempranamente en la socialización de las mujeres, en particular de la mujer popular.

La participación de las mujeres en las organizaciones de sobrevivencia, si bien desplaza hacia ellas el rol proveedor asignado al jefe del hogar, reproduce también la forma subordinada en que se produce la inserción en dichas organizaciones. Esta incorporación femenina es una proyección colectiva de las tareas que realiza tradicionalmente en el hogar: labores tales como cocinar, tejer o comprar para la familia, comienzan a extenderse al barrio: cocina en la Olla Común, compra en los Comprando Juntos, cose, teje o cocina en los Talleres Productivos. Sin embargo, su participación se ve sensiblemente reducida, y es asumida mayoritariamente por los varones, en organizaciones que implican reproducir comportamientos reivindicativos de representación externa, que ellos han tenido posibilidad de aprender en su práctica sindical o partidaria.³³

Para algunos autores,³⁴ esta mayor incorporación de las mujeres a las organizaciones populares derivaría de la reticencia de los varones a participar en ellas, por cuanto este tipo de estrategia de sobrevivencia significaba una ruptura definitiva con la posibilidad de acceso al empleo formal, única posición laboral considerada por ellos como socialmente legítima y reafirmadora de su rol de proveedor material de la familia.

Esta explicación cobra validez probablemente en los primeros años de funcionamiento de dichas organizaciones, en que la situación crítica era percibida como transitoria. Sin embargo, una vez que **-¡Error! Marcador no definido.-**a partir de la promulgación de la Constitución de 1980-**¡Error! Marcador no definido.-** la proyección que se planteaba el régimen militar descartaba completamente la transitoriedad, las organizaciones populares no mostraron un mayor incremento de participación masculina. Al parecer, la reticencia a participar en dichas organizaciones se relaciona más con la percepción de que las tareas que en ellas se realizan **-¡Error! Marcador no definido.-**aun cuando están usurpando su rol proveedor masculino-**¡Error! Marcador no definido.-** son de carácter femenino.

Consecuentemente con el reconocimiento de la proyección a largo plazo del gobierno, las organizaciones sociales comenzaron a modificarse, adecuándose a las condiciones de permanencia que se perfilaban, desplazando su sentido transitorio e instrumental por otro de carácter más propositivo que defensivo. A la vez, comenzaron a ser valoradas como espacios de participación y de desarrollo personal, con un significado, además de material, de carácter simbólico. Para Campero,³⁵ ello constituiría el reconocimiento de la compensación de la institucionalidad perdida que permitiría ir superando progresivamente los prejuicios y reticencias a la acción colectiva. A nuestro juicio, en el caso de los varones esta institucionalidad reconstruida en torno a la acción colectiva podría significar un sucedáneo de su pasada pertenencia a organizaciones de tipo sindical o político. Pero en el caso de las mujeres, que en su gran mayoría no habían tenido un contacto fluido con esa institucionalidad, no se trataría de una compensación. Para ellas, se trataba de una primera aproximación a la institucionalidad. Este punto probablemente se relaciona estrechamente con la estabilidad y perdurabilidad que ha presentado la participación de las mujeres en las organizaciones sociales, y quizás también con su actual dificultad para articularse con la nueva institucionalidad.

De otra parte, tales iniciativas impulsadas mayoritariamente por mujeres, si bien fueron desencadenadas por estímulos provenientes de la esfera económica y política, se inscriben como manifestaciones culturales en las que intervienen proyecciones de formas organizativas y comportamientos que estaban inscritos en su memoria histórica reciente o remota.

Como señaláramos con anterioridad, la experiencia en torno al barrio era una experiencia ya de larga data en Chile, a través de los Centros de Madres, la Promoción Popular o su participación en las Juntas de Abastecimientos y Precios. De este modo, la confluencia de la experiencia organizacional anterior desarrollada por numerosas mujeres, que se reprodujo en el funcionamiento de las diversas organizaciones femeninas; el carácter de las tareas que se debía realizar en ellas, todas labores cotidianas para la mayoría de las mujeres; los objetivos que las convocaban, relacionados con la defensa de la familia; y el carácter barrial de las organizaciones, que permitía una participación femenina sin necesidad de descuidar sus tareas domésticas, son todos factores que se conjugaron para desencadenar este fenómeno participativo masivo de las mujeres populares.

Sin embargo, todo este proceso organizativo no habría llegado a trascender las barreras convencionales de la participación femenina en circunstancias críticas. Un hecho que intervino en forma poderosa en el carácter que asumieron estas organizaciones, fue la misma despolitización emprendida por el gobierno autoritario, que llevó a proscribir cualquier tipo de expresión política pública. Ello tuvo como efecto el que se politizaran los ámbitos tradicionalmente reservados a lo privado, de modo que las relaciones cotidianas, antes ignoradas por la política, surgieron como espacios donde ésta se empezó a desarrollar.

De esta manera, los términos en que la mujer se apropió de los espacios públicos debieran ser invertidos, en tanto no fue la mujer la que invadió esos espacios, sino la política la que comenzó a invadir el espacio cotidiano reservado a las mujeres.

De allí que ni la emergencia de tales organizaciones surgidas como respuestas a situaciones desencadenadas por la amenaza a la vida y a la sobrevivencia de vastos sectores de la población, ni el que las mujeres ocuparan en ellas la labor central, puede ser considerado como un fenómeno de

características extraordinarias ni imprevisibles (aunque ello no significa que debían darse necesariamente). Lo inédito en ello lo constituye, por una parte, las condiciones de fuerte represión política a todo tipo de organización de la sociedad civil en que surgieron, a diferencia de las organizaciones sociales femeninas precedentes, que en su mayoría eran promovidas y articuladas por el Estado; y, por otra parte, el sentido de autonomía que quisieron imprimirle los agentes externos que intervinieron en este proceso organizativo. Su potencialidad de constituirse en un movimiento contestatario radicaba en la reivindicación de los espacios cotidianos, que pasaron a constituirse en espacios públicos reconocidos como legítimos.

De allí que las prácticas sociales emergidas de las organizaciones populares representaran la posibilidad de un embrión de actividad movimientista, para cuyo desarrollo, sin embargo, debían confluír otros elementos que se articularan positivamente en la misma dirección.

La explosión de organizaciones de mujeres

Desde finales de la década del setenta venían conformándose distintas organizaciones de mujeres, tales como el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical. El año 1983 marcó el surgimiento de una serie de organizaciones de carácter feminista; entró en escena el Movimiento Feminista, formado mayoritariamente por mujeres de clase media, cuya presencia influyó en la extensión de esta corriente a algunos segmentos minoritarios de los sectores populares urbanos. Aparecieron organizaciones de mujeres con un marcado sello feminista, tales como "Las Domitilas", "Las Siemprevivas", el Frente de Liberación Femenina, que se proclamaba como organización feminista para obreras y pobladoras. Si bien estos grupos constituyeron una minoría entre las organizaciones de mujeres, su importancia radica en que fueron las primeras organizaciones que se definieron como feministas en los sectores populares. En casi la totalidad de las organizaciones populares prevaleció la definición de las mujeres en torno a sus roles domésticos y la lucha por la supervivencia.

Ese mismo año, 1983, surgió una vasta gama de organizaciones de mujeres, tales como el Movimiento de Mujeres Pobladoras (Momupo), el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (Codem) y Mujeres de Chile (Mudechi), todos los cuales definían su principal objetivo en la lucha antidictatorial.

Aparecieron, asimismo, organismos coordinadores como el Movimiento Pro-Emancipación de la Mujer 1983, (MEMCH'83), organización que reactualiza el nombre de aquella que participó activamente en la lucha sufragista en la década del cuarenta. Agrupaba a 24 organizaciones, entre ellas, el Movimiento Feminista; el Movimiento de Mujeres de Chile, Mudechi; el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical; Mujeres Democráticas; Unión de Mujeres de Chile; el Movimiento de Mujeres Pobladoras, Momupo, el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, Codem, etc. Su objetivo se centró en la coordinación y promoción de actividades conjuntas con los distintos grupos y organizaciones de mujeres de oposición en contra del régimen militar, que ya empezaban a tomar parte en la movilización opositora. Se definió como una instancia coordinadora de agrupaciones y organizaciones de orientación feminista y de oposición.

"Mujeres por la Vida" surgió como una instancia que convocaba a todas las mujeres, tanto de partidos políticos como de organizaciones sociales y feministas, a aunar esfuerzos en torno a la movilización femenina. Participaban más de 30 organizaciones, desde el Departamento Femenino de la Democracia Cristiana al Coordinador Político que agrupaba a las mujeres de izquierda, pasando por las feministas de La Morada, las mujeres organizadas en torno a las ollas comunes, el departamento femenino de la Coordinadora Nacional Sindical y estudiantes universitarias. Esta organización incorporó por primera vez al quehacer femenino la necesidad de discusión acerca de las formas de permanencia de la organización en democracia y el afianzamiento de un actor social mujer.³⁶

Desde su aparición, esta instancia de coordinación se perfiló como el espacio de convocatoria y concertación más amplio de la movilización femenina, ocupando rápidamente un lugar destacado en las manifestaciones de mujeres.

Junto a las diversas organizaciones mencionadas, y probablemente por las tendencias renovadoras que comenzaron a aparecer en el socialismo en el país, en marzo de 1984 se creó el Movimiento de Mujeres por el Socialismo, que intentaba ser una opción tanto para las mujeres militantes de partidos que se acercaban a las corrientes feministas, como para las feministas que se identificaban con una propuesta socialista.

Esta amplia variedad de grupos surgidos en un lapso extremadamente breve, expresa sin lugar a dudas un desarrollo extraordinario de la organización de las mujeres. Las mujeres organizadas participaron activamente, tanto en las jornadas llamadas por las coordinadoras a nivel nacional, como en las organizadas por las agrupaciones femeninas, demostrando un alto poder de convocatoria y movilización. En 1986, en una acción unitaria, elaboraron el Pliego de las Mujeres, que fue incorporado como parte de la Demanda de Chile a la Asamblea de la Civilidad.

Las mujeres pasaron a ser un componente importante en las jornadas de movilización contra el régimen; pero su participación seguía siendo considerada como la de un sector indiferenciado dentro de las fuerzas opositoras. La demanda por democracia se perfilaba como el eje central de la movilización, y sólo en algunas organizaciones se llegó a conciliar la lucha antidictatorial con la demanda de género. Aunque los sectores feministas intentaban conjugar las demandas de género con la demanda por democracia, la tónica que imperó fue la opacidad de las primeras por la segunda.

La erosión de la movilización femenina

Las distintas opciones que se presentaron al interior del conglomerado de las fuerzas opositoras, entre la Alianza Democrática (que representaba la estrategia movilización-negociación) y el Movimiento Democrático Popular (que se pronunciaba por la movilización-insurrección popular), imprimieron una dinámica nueva a las organizaciones de mujeres.

Al interior del MEMCH'83 comenzaron a hacerse visibles las diversas opciones políticas de las organizaciones afiliadas. Algunos grupos defendían su autonomía, en tanto otros se alineaban en una u otra estrategia de la oposición. Ello llevó a un desmembramiento de esta coordinadora: el Movimiento de Mujeres Pobladoras optó por la independencia y continuó su trabajo, asumiendo una creciente identificación con el feminismo. Mudechi se alineó junto a la estrategia insurreccional, planteándose como objetivo la lucha de las mujeres contra el régimen, sin incorporar a ella contenidos de género. Codem y el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical también se retiraron del MEMCH'83. Mujeres por la Vida, que agrupaba a mujeres de todos los sectores opositores en 1986, también se paralizó.

A partir de 1987 se verificó un decaimiento de la actividad de las organizaciones de mujeres, al igual que ocurrió con todos los actores sociales que luchaban en contra de la dictadura. Desde este momento, los partidos comenzaron a tomar el liderazgo en la derrota final del régimen.

En 1988, la movilización femenina se encontraba cruzada por el llamado al plebiscito y por las diferentes estrategias partidistas. Los sectores de mujeres organizadas que optaron por la estrategia insurreccional llamaban a la abstención en el plebiscito; otras, la mayoría, se incorporaron a luchar por el triunfo de la opción "NO". Estas divergencias se hacían notar en las movilizaciones llamadas por las Coordinadoras.

En 1988, mujeres pertenecientes al Movimiento por el Socialismo, de la Democracia Cristiana y de la Federación de Mujeres del Partido Socialista (Núñez), se negaron a sumarse a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Discrepaban de los contenidos que ésta adquiriría, ya que el acento estaba puesto sobre las estrategias partidistas ante el plebiscito y no en las demandas específicas de género.³⁷

El desacuerdo en torno al tenor de las demandas en esta ocasión era el reflejo de una realidad mayor: hasta entonces, se había logrado integrar la heterogeneidad social, cultural y política de las mujeres bajo una estrategia reforzada por la interacción de las fuerzas feministas-políticas y políticas-partidistas, que se conjugaron y potenciaron en una misma acción reivindicatoria. Ahora, la tensión entre sectores más feministas y sectores más políticos daba lugar a diferentes opciones y alternativas.

La desarticulación que se produjo en la acción concertada de las organizaciones de mujeres se manifestó en las distintas concepciones del rol de la mujer y la política. Comenzó la discusión acerca de las prioridades entre la lucha por la democracia o por las reivindicaciones de género. Las organizaciones con un contenido feminista reivindicaban la autonomía de los partidos como un valor intransable. Los sectores que comenzaban a alinearse en torno a las distintas opciones presentadas por los partidos políticos se definían como espacios de lucha contra el régimen, centrando su tarea en la derrota de la dictadura, con lo cual las reivindicaciones de género pasaban a ocupar un lugar secundario.

La posibilidad de potenciar los elementos que estaban en la base del desarrollo de un movimiento de mujeres parecía diluirse por la presencia de una opción por las reivindicaciones de carácter general, en

el marco del derrocamiento de la dictadura, posición que se manifestó más poderosa que aquella ligada a la búsqueda de una identidad de género.

La movilización femenina hizo aflorar a la superficie la presencia de un actor social mujer, pero, por otra parte, develó la ausencia de una articulación entre el mundo organizado de mujeres, así como la carencia de una identidad compartida que les permitiera generar una propuesta política desde las organizaciones. En estas circunstancias, la tan anhelada constitución de un movimiento de mujeres se tornaba lejana y se acercaba más a lo que algunas autoras han llamado "mujeres en movimiento".³⁸

LAS MUJERES EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Una lógica de acción comienza a delinearse

En el período que antecedió al plebiscito de 1988, la movilización femenina tomó nuevos impulsos. Las organizaciones de mujeres participaron activamente en este proceso y, en contra de lo vaticinado, más de 50 por ciento de las mujeres dio su apoyo a la opción en contra de la permanencia del régimen militar.

La democracia se perfilaba cercana y las mujeres esta vez no parecían querer estar ausentes de la posibilidad de participar en la construcción de un nuevo orden. Sin embargo, los desafíos que tenían por delante eran cualitativamente diferentes de los que habían enfrentado hasta entonces.

La movilización de las mujeres bajo el régimen militar asumió un perfil más relevante en la lucha por la conquista de la democracia. Su participación se amplió y cobró fuerzas en contra del autoritarismo y sus demandas se diversificaron en la sobrevivencia digna, el respeto a los derechos humanos, la emancipación o la representación política. Las organizaciones autofomentaban su independencia, descartando la institucionalidad y negando al Estado como interlocutor. Todo ello facilitó el surgimiento de un discurso defensivo que privilegiaba la autonomía. Consecuentemente, las prácticas femeninas que vieron la luz durante este período cobraron un matiz que se acercaba más a una "resistencia heroica" que a una estrategia provista de líneas de acción a largo plazo, capaces de proyectarse en otro escenario. Sin embargo, tales características parecían ahora transformarse en un impedimento a su participación en la construcción democrática.

Para las mujeres organizadas, por tanto, la proximidad de la democracia significaba tener que mudar de lógica de acción; implicaba la sustitución de las prácticas y comportamientos surgidos bajo la dictadura por otros acordes con el nuevo escenario de la transición.

Las diferencias aparecen en las estrategias que comenzaron a esbozar los distintos sectores de mujeres organizadas.

Los sectores más radicales del feminismo optaron por prácticas que se relacionan con una manera de hacer política más cercana a la transformación de la vida en los espacios locales, concretos y cotidianos, privilegiando los cambios culturales y la defensa de la autonomía por sobre su articulación con la democracia política institucional. Las mujeres provenientes de la vertiente feminista política decidieron entrar en el espacio político. La disyuntiva se centraba, por tanto, en mantenerse al margen, salvaguardando la autonomía y previniéndose ante el peligro de cooptación tanto de los partidos como del Estado, o bien en crear una forma de articulación inédita entre mujeres y sistema político. En el contexto de la situación preeleccinaria de 1989, la última opción pareció prevalecer.

Un sector de mujeres predominantemente provenientes de la vertiente política, a la que se sumaron algunos sectores de la vertiente feminista, se incorporaron, reincorporaron o asumieron una militancia política con mayor fuerza dentro de los diferentes partidos. En esta práctica parece haberse dado una importante transformación en la concepción de la militancia femenina y su relación con los partidos.

Este proceso ha sido influenciado por la experiencia de muchas mujeres militantes con las organizaciones femeninas durante los años de desarticulación de los partidos políticos. Una muestra de ello fue la creación, a finales de 1988, de la Concertación de Mujeres por la Democracia. Esta instancia, formada por mujeres de los partidos políticos integrantes de la Concertación de Partidos por la Democracia y de organizaciones sociales, centraba sus objetivos fundamentales en la definición de políticas y programas hacia la mujer para ser efectuados en el futuro gobierno democrático, a fin de que fueran asumidos por los partidos y las futuras autoridades. A la vez, se planteaban apoyar y capacitar a

mujeres a fin de que pudiesen ocupar puestos de decisión en el gobierno, en la administración pública y en el gobierno local.

La Concertación de Mujeres por la Democracia, como fuerza unitaria de mujeres, logró poner en la agenda política del país el tema de la mujer; sin embargo, dentro de sus respectivos partidos, esa fuerza se vio notablemente mermada, lo que explica la magra presencia femenina en los puestos de liderazgo. A pesar del gran impulso que se pretendió dar a esta estrategia de ocupación de cargos, en las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar conjuntamente con la elección presidencial, de un total de 120 diputados, sólo fueron elegidas 7 mujeres. De 38 senadores elegidos, 2 son mujeres.

A pesar de la escasa representación femenina en el Poder Legislativo, su nula presencia en cargos ministeriales y la conciencia de la discriminación interna dentro de los partidos políticos, la militancia femenina ha alcanzado altos niveles en el actual período. Este fenómeno ha recorrido todos los espectros políticos; los partidos de derecha vieron incrementadas sus filas por la afiliación de un vasto contingente femenino, que se incorporó en la perspectiva de ganar espacios en la política. Así, en Renovación Nacional (RN) y la Unión Democrática Independiente (UDI), la proporción de mujeres militantes en 1991 alcanzaba a 49,9 y a 62,2 por ciento respectivamente. Estos partidos declaran la igualdad de la mujer, inserta en su rol de portadora y transmisora de las tradiciones familiares, valores que son más fervientemente defendidos por la UDI. En los partidos integrantes de la Concertación de Partidos por la Democracia, el Partido Demócrata Cristiano cuenta con 40,3 por ciento de militancia femenina, llegando a algo más de 50 por ciento en el Partido por la Democracia y el Partido Humanista, y a una cifra algo mayor a 40 por ciento en el Partido Socialista.³⁹

Considerando que, para la gran mayoría de las mujeres, la militancia activa significa una gran tensión entre sus roles domésticos y laborales, su presencia en los partidos es una señal de una intención de querer participar en las decisiones y destino de la actual transición. Naturalmente, ello implica el previo reconocimiento de que esta posibilidad es factible principalmente a través de los partidos, que se han erigido como las instancias decisivas del proceso.

Esta experiencia no ha estado exenta de dificultades, como lo señalan las propias mujeres: por una parte, reconocen su inseguridad para enfrentarse con lo público; y, por otra, ello no se ve facilitado por las actitudes de sus compañeros de partido, aún no habituados a compartir esos espacios con ellas. Junto a ello, los cargos de decisión dentro de los respectivos partidos siguen siendo territorio masculino. De un total de ocho partidos con representación parlamentaria, sólo uno, la Alianza Humanista-Verde, contó con una presidenta.⁴⁰ La Secretaría General es ocupada por una mujer solamente en el Partido Comunista (sin representación parlamentaria); en el nivel de las vice-presidencias, tanto en el Partido Socialista como en Renovación Nacional, sólo uno de los seis vicepresidentes es una mujer; dos de cinco en el Partido Demócrata Cristiano. En el Partido por la Democracia, de los seis cargos de vicepresidentes, tres son ocupados por mujeres; y en la Alianza Humanista-Verde, dos de los tres son mujeres. Es en este último partido, cuya militancia femenina supera el 50 por ciento, donde precisamente no existe un departamento ni sección femeninas, que se da una mayor participación de la mujer a nivel de todas las estructuras partidarias.

No obstante las dificultades de esta nueva experiencia de las mujeres en los partidos, han cosechado algunos logros importantes. En el Partido por la Democracia y en el Partido Socialista se obtuvo la aprobación de la discriminación positiva, que garantiza a las mujeres el 20 por ciento de representatividad en todas las instancias partidarias.⁴¹ En el reconocimiento de la discriminación interna hacia la mujer en su acceso a los cargos dirigentes, las mujeres militantes han propugnado la creación de Comisiones Político-Técnicas Femeninas en reemplazo de los Departamentos Femeninos. Estas comisiones tendrían como objetivo promover e incorporar el tema de la mujer en las propuestas globales de los partidos. Esta nueva forma de funcionamiento ha sido aceptada principalmente en las tendencias del socialismo renovado, que cobija una activa presencia de mujeres de pensamiento feminista. Por su parte, las militantes de la izquierda tradicional reconocen que en sus partidos ésta es una preocupación nueva que aún no se ha concretado. Sin embargo, esta búsqueda de una mayor presencia femenina al interior de los partidos se ha encontrado con la oposición de las propias militantes que antiguamente conformaban los Departamentos Femeninos, que temen ser desplazadas. Esta situación puede apreciarse dentro del Partido Socialista, y con mayor fuerza dentro de la Democracia Cristiana, en cuyo último Congreso esta proposición ni siquiera fue considerada.

Para las mujeres militantes, la organización exclusivamente en torno a los grupos de base no es suficiente, lo **Error! Marcador no definido.** que no significa desconocer el papel que puedan jugar las organizaciones sociales. De la misma manera, valoran --a pesar de sus diferencias-- la existencia del sector feminista autónomo, en cuanto desde su especificidad pueden hacer aportes a la práctica política. La autonomía es así considerada importante, pero no opuesta a la política.

Las mujeres desde el Estado

Una de las propuestas centrales de la Concertación de Mujeres por la Democracia era la creación de un organismo que garantizara desde el Estado la incorporación de políticas específicas hacia la mujer y su inclusión no discriminatoria en las políticas generales.

En este sentido, la creación del Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, en mayo de 1990, significó un logro en la estrategia de impulsar cambios en la condición de la mujer desde el Estado. La ley por la cual se creó Sernam lo define como "un servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio Secretaría General de Gobierno". "Es el organismo encargado de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, coordinación y aplicación de políticas, planes y programas que garanticen la igualdad de oportunidades en la incorporación de la mujer en diversas áreas del quehacer nacional y que velará por la eliminación de cualquier práctica que obstaculice su participación en el desarrollo social, económico, político y cultural del país".⁴² La dirección superior, técnica y administrativa del Sernam está a cargo de una funcionaria con rango de ministro de Estado y una subdirectora, ambas de exclusiva confianza del Presidente de la República.

La función de este organismo, a diferencia de anteriores instituciones estatales dirigidas a la mujer, no es ejecutora, sino que realiza convenios con municipalidades u otros organismos para la ejecución de los programas diseñados.

La gestión de las mujeres desde Sernam se ha concentrado en la elaboración de políticas y acciones de gobierno dirigidas a la mujer, en el supuesto de que a través de éstas se logrará una igualdad de derechos y oportunidades y una participación efectiva. En la búsqueda de la igualdad de derechos y oportunidades, han elaborado programas de carácter legal para superar los principales obstáculos a la participación femenina en el proceso de desarrollo político, social, económico y cultural del país. Para este efecto, el Sernam ha propuesto al Congreso Nacional modificaciones en la legislación sobre familia, legislación laboral y penal.

Junto con las modificaciones de carácter legal, se han planteado acciones tendientes al reconocimiento del rol social de la mujer, tal como su efectiva incorporación en las estadísticas generales. En la misma dirección, en convenio con el Ministerio de Educación, ha comenzado una revisión de los planes de estudio de la enseñanza básica y media, a fin de eliminar los contenidos sexistas presentes en los textos de estudio.

Para erradicar la violencia intrafamiliar, Sernam ha desarrollado un plan de capacitación a funcionarios de Carabineros, del Servicio Nacional de Salud, jueces y directores de escuelas, para la atención de mujeres maltratadas; la formación de monitoras en esta área y la creación de centros de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar. De la misma manera, ha creado los Centros de Información para la Mujer, que operan en varias comunas del país, entregando información legal, social o psicológica a las mujeres que lo requieran.

Como medidas para favorecer la incorporación de las mujeres de los sectores más pobres, el Sernam ha desarrollado programas dirigidos a mujeres de escasos recursos, preferentemente mujeres jefas de hogar, que contemplan programas específicos en vivienda, salud, educación, justicia y capacitación laboral.

Las políticas hacia la mujer elaboradas desde Sernam se enmarcan en las políticas sociales globales formuladas por el gobierno. De allí que la superación de la pobreza entre las mujeres haya sido definida como uno de los objetivos principales. Las mujeres han sido reconocidas como receptoras directas de los beneficios de las políticas sociales; no obstante, su solo reconocimiento como universo específico de acción no parece ser suficiente para desencadenar procesos más complejos que den cuenta de la condición subordinada y del reconocimiento de esa subordinación por parte de las propias mujeres.

Por otra parte, la escasez del presupuesto asignado a este organismo ha impedido la masividad de la implementación de los programas.

Las mujeres que se desempeñan en él parecen compartir la opinión acerca de la carencia de un referente o una contraparte compuesta por mujeres organizadas con quien dialogar, que permita evitar la unidireccionalidad de las políticas que se deberá establecer. En buenas cuentas, la carencia de una articulación entre el mundo social y el político.

Las mujeres han tratado de ingresar al mundo público, que es un mundo masculino. Las condiciones de esa incursión, son, por lo tanto asimétricas. Persisten las dificultades objetivas y subjetivas de las mujeres para relacionarse con lo público. Muchas de ellas reconocen que las demandas femeninas no son consideradas legítimas en sí, ni tampoco son reconocidas como interlocutores de la misma calidad de otros actores sociales, lo que se ve agravado por tener que insertarse en un orden cuya lógica de funcionamiento es desconocida. Desde el Estado, las mujeres se ven enfrentadas a la creación de una articulación inédita en la historia política del país; una incursión en una esfera en la cual han estado tradicionalmente ausentes o subrepresentadas, y a la cual ha sido más difícil el acceso. Todo ello implica replantearse una nueva relación entre mujeres y sistema político.⁴³

Las mujeres que han decidido incursionar en la arena política, lo hacen desafiando el carácter patriarcal de estas instancias, intentando su transformación interna. Todo ello implica un proceso por el cual ellas deben vencer previamente las barreras impuestas por la socialización femenina, lo cual sólo un sector reducido de mujeres está en condiciones objetivas de realizar, ya sea por su situación laboral, social, cultural o familiar.⁴⁴ Todo esto ha derivado en que, con excepción de algunas mujeres que han sido socializadas políticamente, la inmensa mayoría se margine, como es el caso de un gran número de las integrantes de las organizaciones sociales que constituyeron la vertiente social de las mujeres organizadas.

Por ello, la articulación positiva que las mujeres puedan establecer con el sistema político mediante esta vía, corre el riesgo de constituir un fenómeno de elite de un sector de mujeres en una posición de vanguardia: ocupan espacios de poder para desde ahí impulsar cambios en la situación de las mujeres, con el riesgo de desvincularse de la base social o tener que transar los grandes temas del feminismo en aras de su aceptación en las estructuras políticas. O, como lo llama Souza,⁴⁵ el desarrollo de un "feminismo de Estado", al que acecha el peligro de, al intentar transformar las reglas del juego, tener que transformarse a sí mismo.

La lógica radical o la defensa de la autonomía

Un sector de mujeres provenientes de la vertiente feminista ha circunscrito su campo de acción a la discusión en torno a la democracia, las formas de organización y los temas ligados a la vida cotidiana, desarrollando programas de capacitación, desarrollo personal, organización de redes de mujeres, fundamentalmente entre pobladoras y campesinas. Las motivaciones tras esta práctica se relacionan con el enfrentamiento al orden patriarcal establecido y el convencimiento de que se deben dar profundos cambios en la mujer, lo que enfrentan con gran entrega y con un alto compromiso de su militancia feminista.

A pesar de que en algunos puntos existe confluencia entre este sector --que se denomina como "feministas autónomas"-- y las feministas militantes de partidos, existen tensiones y descalificaciones de las primeras hacia las segundas. Para las feministas autónomas, los partidos políticos son fuerzas altamente atentatorias contra los objetivos planteados por el feminismo. Ven en ellos una manifestación del patriarcado, al igual que sucede con las entidades gubernamentales, consideradas instancias de toma de decisiones de los hombres respecto al resto de la sociedad. De allí que, para ellas, la incursión de mujeres en los espacios institucionales signifique necesariamente reproducir y adoptar los modelos masculinos en el ejercicio de la política y, por ende, reproducir la subordinación femenina, lo que lleva a que las mujeres terminen siendo instrumentalizadas, por el énfasis puesto en los aspectos reivindicativos de género.

La autonomía y pureza del movimiento son percibidas como valores intransables, que llevan a negar cualquier forma de articulación con el sistema político. Desde la autonomía intentan establecer alianzas, contribuyendo desde su perspectiva a la consolidación de la democracia, y a través de su trabajo a la

formación de un movimiento de mujeres. Para avanzar en este sentido, postulan que las demandas femeninas deberían ser canalizadas no sólo ante el Estado, sino ante el conjunto de la sociedad.

El feminismo autónomo percibe la institucionalidad vigente como una amenaza para el movimiento, y aborda el tema del poder desde la cultura y los cambios civilizatorios. Es desde este nivel que implementa las estrategias por desarrollar. Su estrategia se centra, por tanto, en una ampliación de la base del movimiento, para desde allí impulsar cambios culturales.

Ante sus discrepancias con el feminismo político, el feminismo autónomo se ha planteado permanecer como conciencia crítica, evitando la cooptación de parte de los partidos, e intentando establecer alianzas con otros sectores discriminados -**¡Error! Marcador no definido.**- entre ellos los jóvenes y las minorías étnicas-**¡Error! Marcador no definido.**- y otras organizaciones sociales.

Un problema que afronta el feminismo autónomo, que es compartido por el sector político, es la carencia de líderes. Si bien las feministas políticas atribuyen esta carencia a los problemas de socialización femenina y a la subrepresentación tradicional que ha imperado en los cargos públicos, para este sector de mujeres estos obstáculos se han potenciado por la forma de funcionamiento horizontal de las organizaciones feministas, que ha impedido la aparición de líderes visibles y ha facilitado la asunción ambivalente del liderazgo informal.

Otra dificultad que han debido afrontar tiene que ver con la débil articulación del movimiento feminista con las mujeres organizadas, particularmente de los sectores de pobladoras y campesinas, hacia los cuales han orientado su trabajo. Las mujeres pobladoras rehúsan la etiqueta de feministas. Más bien, esta denominación opera como una línea divisoria entre ellas y las feministas organizadas. En ello está implícita también la diferenciación de clase, que ejerce gran influencia en el reconocimiento de sus limitadas posibilidades para liberarse, con respecto a las de clase media. Este rechazo parece presentarse como un obstáculo de difícil superación, al menos en el mediano plazo.

La debilidad de articulación con el mundo organizado de mujeres parece potenciarse por la interpretación de la autonomía en sus términos más estrechos. La autonomía tiende a ser considerada más como una forma defensiva de mantenerse incontaminadas, protegidas al abrigo del grupo, que como una propuesta ante la sociedad, para lo cual necesariamente tendrían que entrar en conflicto y negociación con los demás actores sociales. Tal concepción de la autonomía más podría conducir al aislamiento que a convertirse en una alternativa para las mujeres.

En general, a pesar de la existencia de numerosas interrogantes no resueltas por el propio feminismo autónomo, relativas a las definiciones generales del movimiento, es innegable su influencia en el desarrollo del proceso de reconocimiento de la subordinación femenina que han comenzado las mujeres.

Una lógica no definida: las mujeres en las organizaciones sociales

El gran universo de mujeres organizadas, en la década pasada, estaba constituido por mujeres, en su mayoría pobladoras. Junto a las nuevas organizaciones sociales permaneció la organización tradicional de las mujeres en los Centros de Madres a través de CEMA-Chile, dirigido por la primera dama y con el apoyo del voluntariado.

Poco antes de asumir el nuevo gobierno, CEMA-Chile, que bajo sus distintas denominaciones había estado presidido desde sus inicios por la esposa del Presidente de la República, fue traspasado a la dirección de la esposa del Comandante en Jefe del Ejército. De este modo, los centros de madres quedaron bajo la dirección de Lucía Hiriart de Pinochet, como esposa del Comandante en Jefe del Ejército. La Secretaría de la Mujer, que también era presidida por la primera dama, desapareció con la creación de Sernam. Es decir, de todos los organismos que estaban bajo la dirección de la esposa del presidente, la actual primera dama sólo recibió la Fundación de Ayuda a la Comunidad, que fue reorientada y pasó a llamarse Integra. Junto a este organismo, se crearon otros nuevos: la Fundación Nacional de la Familia, que deriva sus acciones a la formación de centros comunitarios familiares, y Promoción de los Derechos de la Mujer (Prodemu).

Prodemu, sucesor en la práctica de la gestión de la organización femenina desde el Estado, tiene como objetivo aglutinar a los centros de madres que se desafían de CEMA-Chile y a nuevas organizaciones que decidan ampararse bajo este organismo. Se define como una instancia de promoción y apoyo a las

mujeres de todo el país, que privilegia su autonomía y participación, y sustenta la solidaridad como principio fundamental al interior de las organizaciones femeninas. Las organizaciones que alberga son mayoritariamente talleres artesanales y centros de madres, aunque se cuentan entre ellas algunas organizaciones de Iglesia y juntas de vecinos. Las líneas de trabajo principales son la formación, información, capacitación y asesoría. Cuenta con un equipo de monitoras que implementan los programas de capacitación y un grupo de mujeres colaboradoras (Solidarias) que están en contacto con las organizaciones y sirven de nexo entre éstas y la institución.

Junto con declarar la intención de reactivar la organización de las mujeres como fundamento para la convivencia democrática, y en concordancia con la orientación general del gobierno, Prodemu ha definido su acción preferencial entre las mujeres de escasos recursos, capacitándolas para la generación de ingresos propios. La capacitación, a cargo de las monitoras, está orientada hacia labores consideradas como tradicionalmente femeninas.

Según las informaciones con que cuenta Prodemu, en 1991 entró en contacto con 2.500 organizaciones, de las cuales al menos la mitad recibió algún programa proporcionado por la institución. Se calcula que ha llegado a un número aproximado de 70 mil beneficiarias a través de campañas y encuentros de mujeres a lo largo de todo el país.

Dada la corta existencia de esta institución, no es posible evaluar en qué medida se pueda erigir como una alternativa de organización de las mujeres; sin embargo, todo parece mostrar que, a pesar de las innovaciones introducidas en la orientación, sus programas y métodos de trabajo siguen enmarcados en los ya tradicionales de la organización femenina desde el Estado. Sería interesante evaluar posteriormente la complementariedad o paralelismo que pueda mostrar con respecto a Sernam, particularmente en lo referente a la labor organizativa, ya que este último organismo no tiene dentro de sus funciones la organización de las mujeres.

Junto con la reactivación de la organización de las mujeres desde el Estado, en este sector, que fuera escenario del surgimiento de múltiples organizaciones de la más variada índole, permanecen las agrupaciones de mujeres. Momupo mantiene cierta presencia entre las pobladoras, al igual que algunas organizaciones de carácter feminista. Otras organizaciones funcionales, tales como los Grupos de Salud, constituidos en un cien por ciento por mujeres, se mantienen vigentes y su acción gira en torno a las ONG que les dieron origen.

No obstante la permanencia de estas organizaciones, impera un sentimiento de desencanto entre las mujeres organizadas, que se expresa en un decaimiento de su actividad. Muchas de ellas consideran que la participación en democracia se hace más difícil y menos fluida que en el régimen autoritario, por cuanto ha sido delimitada a organizaciones que cuenten con un grado de legitimidad, lo que se expresa en su institucionalización, a la cual se resisten.

Como señalábamos anteriormente, para la gran mayoría de las mujeres organizadas de este sector, la forma de institucionalidad generada por sus organizaciones significaba un primer contacto con el grupo exterior, una forma de organización social que despertó sentimientos de alta valoración de sus propias prácticas. De allí que en el nuevo contexto, en que se demanda a las organizaciones una adecuación a la nueva institucionalidad, las organizaciones de mujeres se encuentren desmovilizadas, entrampadas en una situación que demanda mudar de comportamientos, revalorizar nuevos interlocutores y abrirse desde la calidez del grupo pequeño a un espacio más amplio. Este paso para muchas es una amenaza a su autonomía o un temor a diluirse entre la diversidad de actores del mundo local. En síntesis, es la expresión de la dificultad del paso de la organización informal a la formal; de lo antisistémico a la revalorización de las mejoras en las condiciones de vida que puedan provenir de la esfera pública.

En forma general, existe una amplia desconfianza y rechazo a lo catalogado como "político". La apreciación más difundida, incluso entre las mujeres militantes, es que los partidos han entrado a dividir las organizaciones. Los conciben como una amenaza a la organización y temen la manipulación de que pudieran ser objeto por parte de ellos. Para ellas, los partidos no tienen interés en el tema de la mujer, salvo para fines clientelísticos.

Con respecto al Estado, también es posible constatar una cierta dosis de desencanto. Las mujeres organizadas perciben que poner las esperanzas de resolver problemas inmediatos en la acción estatal es una conducta propia de la relación paternalismo/clientelismo. Evalúan negativamente la política social

implementada por el gobierno, la catalogan de insuficiente, y no se sienten directamente beneficiadas por ella, como sucediera en tiempos pasados. El Sernam es desconocido o lejano para la mayoría de las mujeres, y no lo identifican como el organismo de donde pueden provenir las políticas hacia la mujer. Las que están informadas acerca de la existencia del Servicio Nacional de la Mujer, sienten decepción de su gestión, pues esperaban de esta entidad un carácter netamente asistencial. En la formación de estos juicios han influido, con toda seguridad, tanto la comprobación de la retirada definitiva del Estado benefactor, como la carencia de una política de difusión acerca de su función y carácter de parte del propio Sernam.

No obstante estas manifestaciones, se percibe el comienzo del abandono de la conducta autorreferida de los primeros años de las organizaciones, así como una manifestación de querer establecer una articulación con el mundo social y local, en el que reconocen su referente más cercano y válido. El municipio ha comenzado a adquirir una validez creciente, ya no sólo como una entidad dadora de beneficios, sino como un posible interlocutor.

Como se puede apreciar, es en este segmento de mujeres donde confluye la acción tanto de las políticas públicas diseñadas desde Sernam como las implementadas desde el municipio, y la de las organizaciones que se enmarcan en un funcionamiento más tradicional, tales como los centros de madres y Prodemu. Junto a ellas, también coexisten las ONG, que han orientado su trabajo en los últimos años hacia una acción complementaria de las políticas gubernamentales, especialmente de la política social.

En tales circunstancias, la articulación entre las distintas organizaciones sociales que comienzan a recomponerse a nivel local se encuentra cruzada por diferentes líneas de acción que, si bien en su inspiración teórica tenderían a potenciar la participación y organización femeninas, en la práctica responden a formas de articulación no necesariamente complementarias entre sí, cuyo único punto de encuentro está en la definición de la pobreza.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Tradicionalmente, en Chile como en otros lugares, los procesos de participación e integración vividos por las mujeres han sido intermitentes, seguidos por un ineludible repliegue. La situación actual en el país es, sin embargo, diferente en varios aspectos.

En primer lugar, los sectores de mujeres se han propuesto crear formas de articulación, ya sea desde dentro o desde fuera del sistema político, con lógicas distintas aunque no excluyentes. Junto a ello se evidencia un campo más favorable, en tanto el propio sistema político ha mostrado una actitud más favorable a incorporar algunas de las demandas de las mujeres. La creación de Sernam, un organismo sin precedentes en cuanto a las funciones que desempeña y su forma de articulación con otras entidades gubernamentales, es una prueba de ello.

Por parte de las organizaciones de mujeres, probablemente lo más nuevo no sean las propias demandas, ya que muchas de ellas son las mismas de décadas anteriores que no han tenido un cauce positivo de satisfacción. Lo que puede considerarse como signo de una nueva conciencia, es que tales demandas se hayan articulado trascendiendo los espacios privados, convirtiéndose en demandas públicas. De este modo, puede afirmarse que, a diferencia de lo acaecido durante la dictadura, en que la política invadía los espacios cotidianos, actualmente puede pensarse en una reinversión de los términos; por tanto, algunos problemas considerados del ámbito estrictamente privado, como por ejemplo la violencia doméstica, son tratados como demandas públicas, al mismo nivel de los derechos humanos.

El éxito de la articulación que establezcan las mujeres con el resto de la sociedad dependerá también de las propias articulaciones internas que se creen entre los distintos sectores organizados. Tanto las que han optado por los cambios desde dentro del sistema, como las que privilegian las transformaciones culturales desde fuera de él, son una minoría que sólo podrá llegar a la gran mayoría de las mujeres en la medida en que sepa articularse con el enorme contingente femenino que no ha optado, o no está en condiciones de hacerlo, por una lógica y una articulación definidas, pero que no por ello es carente de demandas.

NOTAS

1. En esta época surgieron numerosas organizaciones femeninas, tales como el Consejo Nacional de Mujeres, en 1919, que promovía sus derechos ciudadanos. En 1922 esta organización presentó un proyecto sobre derechos civiles y políticos de la mujer que incorporaba la demanda por derecho a voto en las elecciones municipales, la derogación de la legislación discriminatoria contra la mujer y la aprobación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. En esa misma fecha fue fundada la Liga Femenina Nacional, que intentaba la incorporación de las mujeres obreras a las reivindicaciones políticas de las de clase media; y el Partido Cívico Femenino, que definía su acción en el ámbito específicamente político y la reivindicación de sus intereses ante el Estado. No obstante esta proliferación de organizaciones, la demanda central de todas ellas convergía en la conquista del derecho a voto femenino.
2. La Constitución Política de 1925 promulgada bajo su mandato sólo incorporó algunas disposiciones sobre la familia, ingresos, capacidad jurídica y protección a la madre trabajadora.
3. "Estoy cierto de que su exquisita sensibilidad, su intuición proverbial y la admirable objetividad con que siempre sabe apreciar los fenómenos políticos y sociales, producirán efectos profundamente saludables en nuestro ambiente nacional, que habrán de traducirse en reales beneficios para la colectividad, en una mayor limpieza de nuestros procedimientos y medios políticos y en un seguro progreso moral y material para nuestra patria". Intervención del diputado Luis Amunátegui.
"La debilidad física de la mujer y el instinto y afecto maternales, la tornan en más directamente interesada en la cosa pública, en la paz social, en la educación de los hijos". Intervención del diputado conservador Sergio Correa.
". . . desde esta tribuna contribuirán a dar soluciones y a hacer más efectivas las luchas contra la usura, la especulación, la explotación de menores, la prostitución, las enfermedades sociales y otros males que se deben a la mala e injusta organización de la actual sociedad". Intervención del diputado Tapia, del Partido Socialista.
4. N. Molina, "El estado y las mujeres: una relación difícil", en *Transiciones. Mujeres en los procesos democráticos* (Santiago: ISIS, 1990).
5. V. Schild, "Gender, class and politics: Poor neighbourhood organizing in authoritarian Chile". Tesis para la obtención del grado de Doctor en Filosofía de la Universidad de Toronto, 1991.
6. CODE, Confederación por la Democracia: Confederación política formada en 1972 por los partidos de oposición para enfrentar en una lista común a los candidatos de la Unidad Popular en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. La lista de la CODE obtuvo 56 por ciento de los sufragios y la de la Unidad Popular, 44 por ciento.
7. La Promoción Popular fue un organismo creado bajo el gobierno demócratacristiano de Eduardo Frei, dentro del contexto de la política propugnada de integración de los sectores marginados. Se constituyeron más de 20 mil organizaciones de base: juntas de vecinos, centros de madres, centros juveniles, centros deportivos, centros de padres y apoderados y otros. La Consejería de la Promoción Popular asesoraba y capacitaba a estas organizaciones, coordinando su acción con la de otros organismos públicos y municipales para la solución de los problemas inmediatos.
8. Según declaraciones de Carmen Gloria Aguayo, para entonces activa militante demócratacristiana, designada más tarde bajo el gobierno de la Unidad Popular como futura ministro de la Familia. Citado por V. Schild, "Gender, class and politics".
9. T. Valdés, M. Weinstein, M. J. Toledo, L. Letelier, "Centros de Madres 1973-1989. ¿Sólo disciplinamiento?" (Santiago: Flacso, 1989).
10. Schild, "Gender, class and politics".
11. Ya en 1888 la militancia femenina fue aceptada por el Partido Radical; en 1889 por el Partido Democrático; en 1911 por el Partido Progresista; en 1933 el Partido Socialista creó la Acción de Mujeres Socialistas; en 1938 fueron aceptadas en la Falange; en 1939 en el Partido Liberal, aunque con una participación restringida a los asuntos municipales; en 1941 el Partido Conservador creó la Sección Femenina de Asistencia Social.
12. M. Aylwin, S. Correa, M. Piñera, "Percepción del rol político de la mujer. Una aproximación histórica", *Documentos ICHEH* (Santiago, 1986).
13. Citado por Aylwin, Correa, Piñera, "Percepción del rol político de la mujer".

14. María de la Cruz, presidenta del Partido Femenino, fue elegida senadora por Santiago con 107.585 votos, contra 68.350 de la segunda mayoría. A los siete meses de su elección, las dirigentas del Partido Femenino presentaron al Senado una solicitud de inhabilitación para la senadora, en que se la acusaba de manejos económicos irregulares y de recibir fondos de la Fundación Eva Perón, de Argentina. María de la Cruz fue inhabilitada.
15. N. Molina, "El estado y las mujeres".
16. En 1972 se calculaba que sólo 20,4 por ciento de las mujeres con derecho a voto realizaban una actividad política y que 15 por ciento de ellas pertenecía a partidos políticos, en tanto que, ya en 1958, 42,2 por ciento de los hombres con derecho a voto realizaba actividades políticas. E. Cleary, "Papel de las mujeres en la política en Chile: acerca del proceso de emancipación de las mujeres chilenas durante la dictadura militar de Pinochet". (Universidad de Aquisgrán, Alemania, 1987).
17. En 1935, Pedro Aguirre Cerda, candidato del Frente Popular, decidió no apoyar la ley que otorgaba derecho a voto a las mujeres por temor a que sus tendencias conservadoras hicieran fracasar el proyecto del Frente Popular. (Kirkwood, 1986).
18. Cleary, "Papel de las mujeres".
19. En 1952, cuando por primera vez las mujeres votaron en una elección presidencial, sólo 30 por ciento del electorado estaba constituido por mujeres; en 1958 ascendió a 35,2 por ciento; en 1964 a 47,3 por ciento; en 1970 a 48,7 por ciento, y sólo en 1989 alcanzó la real proporción de mujeres en la población en edad de votar: 51,5 por ciento.
20. Encuesta CERC, diciembre, 1987. Judith Aztelarra analiza este hecho en su estudio "La cultura política de las mujeres", en N. Lechner, comp., *Cultura política y democratización* (Santiago: Flacso, Clacso, ICI, 1987).
21. B. Gallardo, "La opinión de las mujeres (un ejercicio de análisis de encuesta)", *Documento de Trabajo* N° 426, Flacso (Santiago, 1989).
22. Discurso de Lucía Hiriart de Pinochet, octubre de 1973.
23. Declaración de Principios de CEMA Chile.
24. El voluntariado bajo el régimen militar llegó a agrupar a más de 52.000 mujeres. D. Del Gatto, "Canales institucionales de participación de la mujer en Chile". *Documento Instituto de la Mujer* (Santiago, 1989).
25. M. E. Valenzuela, "Mujeres y política: logros y tensiones en el proceso de democratización", *Proposiciones* 18 (Santiago: SUR, 1990), pp. 210-32.
26. Valdés, Weinstein, Toledo, Letelier, "Centros de Madres 1973-1989".
27. Entre 1970 y 1985, la fuerza de trabajo femenina aumentó en 4,5 por ciento. En estas cifras, sin embargo, no se considera las mujeres que laboran en el sector informal, que absorbe una alta proporción de mujeres, especialmente provenientes de los sectores populares.
28. M. E. Valenzuela, "Mujeres y política".
29. La intervención de los partidos es percibida como un factor que podría romper el sentido comunitario de las organizaciones. G. Campero, *Entre la sobrevivencia y la acción política* (Santiago: ILET, 1987).
30. L. Mires, "La política social en los países socialistas: el caso húngaro", *Documentos de Trabajo*, Programa de Economía del Trabajo, PET (Santiago, 1986).
31. A. Arteaga, E. Largo, "Las ONG en el área de las mujer y la cooperación al desarrollo" (Santiago, marzo 1989).
32. Las organizaciones de sobrevivencia agrupaban en 1984 aproximadamente a 120 mil pobladores de la Región Metropolitana, de los cuales más de 80 por ciento eran mujeres. Datos del Proyecto de Organizaciones Económicas Populares, Clarisa Hardy (Santiago: PET, abril 1984).

33. En 1987 las organizaciones integradas sólo por mujeres se distribuían de la siguiente forma, según el tipo de organización:

Organizaciones laborales productivas	89,7%
Organizaciones de consumo alimentario	43.4%
Organizaciones de servicios sociales	36.3%
Organizaciones laborales reivindicativas	2.1%

Fuente: T. Valdés, E. Gomariz, "Mujeres latinoamericanas en cifras. Avances de investigación" (Santiago: Flacso, 1991).

34. Campero, *Entre la sobrevivencia y la acción política*; C. Hardy, *Organizarse para vivir: pobreza urbana y organización popular* (Santiago: PET, 1987).

35. Campero, *Entre la sobrevivencia y la acción política*.

36. N. Molina, "Lo femenino y lo democrático en el Chile de Hoy" (Santiago: Vector, Centro de Estudios Económicos y Sociales, 1986).

37. Adriana Muñoz, miembro de la Federación de Mujeres del Partido Socialista (Núñez), en declaraciones a la Revista *APSI* (marzo de 1988) señalaba: "El acto fue organizado por el MEMCH, expresión concreta del Partido Comunista, implementando sus consignas y publicando avisos del comando contra el fraude". En la convocatoria unitaria se leía: "No a la Constitución que pretende bajo falsa publicidad y el miedo engañar nuevamente al pueblo". En otro volante aparecía: "Los ricos votan, el pueblo lucha. Día Internacional de la Mujer".

38. A. Muñoz, "Fuerza feminista y democracia: utopía a realizar" (Santiago: Instituto de la Mujer, Vector, Ed. Documentas, 1987).

39. En promedio, la afiliación femenina a los partidos políticos es cercana a 49 por ciento. Datos del Servicio Electoral, 1991.

40. La diputada Laura Rodríguez, recientemente fallecida.

41. Al respecto, es interesante señalar que, como resultado de esta medida, el Partido por la Democracia, que fue el primero en impulsar esta acción, tiene 50 por ciento de sus cargos ocupados por mujeres, superando el 20 por ciento establecido como mínimo.

42. Proyecto de ley de creación del Servicio Nacional de la Mujer, artículo 2.

43. L. Mires, N. Molina, M. E. Valenzuela, "Cambio social, transición y políticas públicas hacia la mujer" (Santiago: Instituto de la Mujer, 1989).

44. Es necesario tener presente que una parte importante de mujeres que han logrado cargos de decisión política pertenecen a familias con esta tradición, o bien son esposas de políticos destacados.

45. E. Souza, "Las feministas, los feminismos y el Estado" (ISIS Internacional, 1986).